

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 25 de 1874.—Visto el presente juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Telésforo Alcanta, contra los procedimientos de los jueces de letras de Celaya y Salvatierra, por haberlo condenado el segundo á la pena capital como plaguario, y haberse creído el primero con derecho á hacer ejecutar la sentencia, violando el uno como Juez instructor y como ejecutor el otro, las garantías consignadas en los arts. 20, fracción 4ª y 5ª, 23 y 18 de la Constitución general. Visto el informe de la autoridad responsable con los documentos que le acompañan; el parecer fiscal; la sentencia del Juez de Distrito que niega el amparo.

Considerando: Que consta de autos que el Juez de Salvatierra comenzó á instruir el proceso del solicitante en 15 de Mayo de 1871, época en que habiendo terminado en Abril la suspensión de garantías para los plaguarios, decretada en el año anterior por el Congreso de la Unión, aun no estaba promulgada la ley que prorogó esta suspensión por un año, contado desde 18 de Mayo del mencionado de 1871.

Que consta igualmente, que el Juez de Salvatierra siguió un procedimiento extraordinario para juzgar al solicitante, fundándose en un decreto de la Legislatura del Estado que lo prevenía así, según se deduce de las referencias terminantes que obran en diversas piezas del expediente.

Que este decreto de la Legislatura, dado espresamente contra los plaguarios, sin que el Congreso de la Unión hubiera suspendido las garantías individuales para estos delinquentes, importaba una infracción del art. 18 fracción 1ª del Pacto federal.

Que así mismo, aplicando el Juez de Salvatierra el procedimiento ordenado en dicho decreto al solicitante Telésforo Alcanta, ha violado la garantía consignada en el citado artículo constitucional, juzgando al quejoso por una ley privativa.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito, y que la Justicia de la Unión ampara y protege á Telésforo Alcanta, el cual queda á disposición de la autoridad competente.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Anza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*S. Guzmán.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 22 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Ramon Alvarez Nieto, como apoderado de D. Luis M. Salazar, contra procedimientos judiciales del C. Magistrado Quintín Sanry, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

D. Ramon Alvarez Nieto, en representación del C. Luis Mateo Salazar, solicita el amparo de la Justicia federal, contra los actos del C. Magistrado del Tribunal Superior del Estado Lic. Quintín Sanry, en que le desechó la recusación que de su persona interpuso, le denegó la súplica y el recurso de denegada súplica, y á las veinticuatro horas no se le había dado el certificado que tenía

pedido, debiendo pronunciar sentencia sobre el negocio principal en el mismo día de la fecha de su ocurrencia, y pareciendo ser esa sentencia lo que pide se suspenda por no venir expresado en él, lo que por el artículo 4º de la ley de amparo, debió expresarse determinado y no genéricamente.

El C. Magistrado informa entre otras cosas, que desechó de plano la recusación en cumplimiento del artículo 225 de la ley para la Administración de Justicia del Estado, por no haber llenado el recusante los requisitos que la misma ley exige, de hacerlo con firma de letrado, y depositando antes la multa de 25 pesos; y que apoyado en la misma disposición y en otros artículos de la misma ley, fué resolviendo las articulaciones impertinentes que el recusante siguió promoviendo sin haber dejado de oírlo, sino que por el contrario, había tenido que poner cuatro autos diferentes citando para sentencia, habiendo sido el último el del día anterior á su informe, en el que señaló para la vista, el Sábado 13 del corriente.

El artículo 302 de la misma ley citada (si no estuviere trastornada la numeración del ejemplar que tengo á la vista), ordena: "Cuando alguna de las Salas del Tribunal Superior deniega la apelación ó suplica, la parte que se siente agraviada, ocurrirá á la que debe conocer de la instancia siguiente, y expedirá los autos en los mismos casos y del mismo modo que queda establecido." Y no componiendo el Juzgado de Distrito la Sala que debe conocer de la instancia siguiente, es manifiesto que el solicitante ha extraviado el camino; que le sobran recursos legales ordinarios de que puede hacer uso, y consiguientemente que no precede el amparo, y menos es de accederse á la suspensión pedida; por lo que el Promotor fiscal pide que se deniege.

San Juan Bautista, 13 de Junio de 1874.
—*Lic. Cordera.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Julio 4 de 1874. — *Gabriel Sosa*, secretario.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Julio 4 de 1874. — Vistos: el ocurrencia de 10 del próximo pasado, en que el C. Ramon Alvarez Nieto, como apoderado de D. Luis M. Salazar, entabló el recurso de amparo contra procedimientos judiciales del C. Magistrado Quintin Sanry, fundando su acción en la violación que en dichos procedimientos supone cometido, de los artículos 3º y 17 de la Constitución nacional, y alegando otras varias especies; los informes de la autoridad mencionada, y la justificación que produce; los pedimentos del C. Fiscal; el último alegato de la parte actora, y todo lo demás que se tuvo presente y ver convino, el Tribunal, concretando su examen á la violación de garantías alegada por el quejoso, y descartando de la cuestión las demás circunstancias de que hace mérito por no ser de oportunidad en el presente juicio, considera en primer lugar: que el artículo 316 de la ley de Administración de Justicia del Estado, comprende efectivamente entre los requisitos que establece para dar curso á las recusaciones, la condición de que el recusante deposite previamente la multa á que haya de ser condenado en caso que el recurso se califique de interpuesto maliciosamente ó sin fundamento; mas esta prescripción no importa en ningún concepto trasgresión del artículo 17 constitucional que suprime las costas judiciales, por cuanto la exhibición de que se trata no tiene tal carácter, sino el objeto de evitar que se haga ilusoria la imposición de la pena pecuniaria, en caso de que el recusante sea declarado incurso en ella. Con mas razón podría llamarse opuesto á este artículo el uso del papel sellado en los juicios, y con todo, hasta ahora no se ha visto declarado así, pues es evidente que lo que la Constitución prohíbe es que los jueces y curiales cobien de las partes la retribución que antes se exigía con el nombre de costas. La ley que establece tal condición en la introducción de las re-

cusaciones, bien podrá dar lugar á objeciones respecto de los litigantes escasos de facultades; pero esto no quiere decir que sea anticonstitucional, en segundo lugar: los compulsos acompañados por el C. Magistrado Sanry, acreditan que el Sr. Alvarez ha tenido en todas las actuaciones á que se refiere, franco y expedito el derecho de petición, que en ningún sentido aparece violado en su perjuicio. Por consiguiente, no hay á juicio del Tribunal, violación del artículo 8º, y carece de aplicación el 126 de la Constitución nacional, que también ha citado el quejoso. Faltando pues los fundamentos constitucionales del amparo solicitado, y teniendo presente el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, de cuya observancia este Tribunal no puede dispensarse; en cumplimiento además del artículo 101 de la Constitución de la República, el mismo falla definitivamente. 1º: La Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Ramon Alvarez Nieto, contra las providencias judiciales que cita del C. Magistrado Quintin Sanry. 2º: Dese cuenta á la superioridad para los efectos de la ley.

Lo proveyó el C. Lic. Limbano Correa, Juez de Distrito del Estado, y firma conmigo su escribano que Doy fé.—*L. Correa.*—*Ante mí.*—*Gabriel Sosa.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Julio 4 de 1874.—*Gabriel Sosa*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Agosto 24 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Ramon Alvarez y Nieto en representación de D. Luis M. Salazar, contra la providencia dictada por el Magistrado de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Estado, declarando de plano la recusación que de él había hecho Salazar en un negocio judicial, por no con-

tener firma de letrado el escrito en que se formulaba, y no haberse depositado la multa que designa la ley para el caso de declararse improcedente la recusación, cuya providencia viola, en concepto del quejoso, las garantías que consignan los artículos 8 y 17 de la Constitución federal.

Considerando: que la prescripción de la ley de Justicia del Estado de Tabasco, para que todo escrito de recusación deba contener la firma de un letrado, en nada vulnera el derecho de petición que garantiza el artículo 8º constitucional; pues dicha prescripción no tiene por objeto restringir este derecho, sino evitar la demora de los negocios judiciales, originada de la interposición de recursos maliciosos ó temerarios.

Considerando: que la multa cuyo depósito se exige á Salazar, es á todas luces una pena, y no la remuneración de cualquier servicio hecho por un empleado del ramo judicial, motivo por el cual es inaplicable al caso presente, el artículo 17 de la Constitución, en la parte que declara abolidas las costas judiciales.

Considerando: que si bien el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, declara que no es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales, los tribunales de la Federación, deberá atenderse ante todo al texto expreso de la Constitución que es la Suprema ley del país, y la cual, por sus artículos 101 y 102, establece este recurso contra toda clase de autoridades sin escepción alguna, precepto robustecido por la práctica constante y uniforme de esta Suprema Corte de Justicia, consideraciones que debió haber tenido presentes el C. Lic. Cordera, Promotor fiscal del Juzgado de Distrito de Tabasco, al extender su parecer en este negocio, pidiendo se negara el amparo, con fundamento del expresado artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Por estas consideraciones y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pro-

nunciada por el Juez de Distrito de Tabasco en 4 de Julio del presente año que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protego al C. Luis M. Salazar, contra la providencia del C. Magistrado de la 1ª Sala del Tribunal Superior del Estado, que ha dado origen á este recurso.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándolo testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Miguel Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio María Altamirano.*—*Simón Guzmán.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar* secretario.

Es copia que certifico. México, Setiembre ... de 1874.—*Enrique Lande.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan por el C. Lic. Manuel Castillo Manzanilla, contra los CC. que funcionan como Tribunal Superior de Justicia de ese Estado, por haberle impuesto una multa por infraccion de la ley de papel sellado de 14 de Febrero de 1856.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El informe emitido por el ciudadano que lleva la voz de la Junta que, con el título de Tribunal Superior de Justicia, ejerce el acto reclamado por el C. Manuel Castillo Manzanilla en el presente juicio de amparo, viene á poner el sello de justificacion á los

TOMO VI.—PARTE II.

fundamentos en que el infrascrito se apoyó al pedir que se suspendiera desde luego ese acto, pues en dicho documento se reconoce que los magistrados, conforme á la Constitucion particular del Estado, deben proceder del sufragio popular y que la Legislatura es la que debe hacer el escrutinio de la eleccion, y expedir el decreto declaratorio de su resultado. Luego sino ha sido ese cuerpo legislativo el que ha practicado tales actos, no pueden llamarse magistrados los que emanan de ellos. Ocioso sería sin embargo, tratar de probar el grado de una evidencia mas perfecta de la que hasta aquí se tiene sobre ese punto, que los cinco individuos que se quedaron funcionando como Congreso en el palacio del Estado, bajo la proteccion inmediata de las fuerzas federales, constituyen realmente el Poder legislativo que segun las leyes locales, se compone de catorce diputados; pues separados nueve de estos del ejercicio de sus funciones legítimas por el golpe de mano que tanta celebridad ha llegado á conquistar entre nosotros por las funestas consecuencias que está produciendo, nunca, desde entonces, ha podido esa minoria de los cinco escogidos formar cuerpo en que se encarna autoridad alguna. Las descepciones amarguísimas que se sufren en el resbaladísimo campo de la política habian hecho aceptar como cosa corriente; pero hiperbólica, la paradoja de que en ese mundo falaz de la política "tres y dos no son cinco;" pero á nadie, sino á los ciegos por el espíritu de su intere particular, más que de algun partido; podrá ocurrírsele sostener seriamente que "nueve son menos que cinco." En este punto, pues, consiste la dificultad; que pruebe la Junta, ciudadanos titulados magistrados, que los cinco diputados protegidos por la fuerza de las armas, con insulto de la tan decantada é hipócritamente invocada soberanía del Estado, constituyen el cuerpo legislativo del mismo, y entonces el fiscal será el primero en respetar sus determinaciones, y en reconocer como verdade-